
El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales

Preliminary Pre-Judicial Inquiry Service: Juridical-Pastoral Aspects

RECIBIDO: 1 DE ABRIL DE 2016 / ACEPTADO: 11 DE ABRIL DE 2016

Pedro A. MORENO GARCÍA

Juez

Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Madrid

pamoga00@yahoo.es

Resumen: La indagación prejudicial es un servicio cualificado y facultativo, creado en el ámbito de la pastoral matrimonial unitaria por el Obispo diocesano. De este modo, el Obispo muestra su solicitud hacia todos los que se hallan separados o divorciados y se cuestionan la existencia de su vínculo matrimonial. En primer lugar, este servicio ofrece los medios adecuados para tratar de superar la crisis conyugal y restablecer la convivencia, llevando a cabo una convalidación del matrimonio si fuera necesario. En segundo lugar, comprobada la imposibilidad de la reconciliación, la finalidad de la indagación prejudicial se orienta hacia la viabilidad de un proceso de nulidad matrimonial, recogiendo los elementos útiles para la introducción de la demanda ante el tribunal competente. Indudablemente, la elaboración de un vademécum para unificar criterios de actuación en la fase prejudicial sería un instrumento de gran ayuda. También serviría para crecer en la actitud misionera de una Iglesia «en salida» (EG 46).

Palabras clave: Prejudicial, Indagación, Servicio pastoral.

Abstract: Pre-judicial inquiry is an authorized, optional service, established by the diocesan bishop as part of marriage pastoral work as whole. In this way, the Bishop shows his concern for separated or divorced persons who question the existence of their marriage bond. Firstly, this service offers the resources required to attempt to overcome the crisis in the marriage and restore it, by reaffirming the marriage if necessary. Secondly, should reconciliation prove impossible, the purpose of the pre-judicial inquiry turns to the viability of the marriage nullity process, collecting the elements necessary for the presentation of the case before a competent tribunal. Clearly, a *vademecum* consolidating standards of practice in the pre-judicial stage would be a very useful resource; it would be also a way to grow in the missionary outlook of a Church which «goes forth» (EG 46).

Keywords: Pre-Judicial, Inquiry, Pastoral Service.

1. UNA MAYOR SOLICITUD PASTORAL

La relevancia otorgada al servicio de indagación prejudicial¹ en la reforma del papa Francisco, llevada a cabo mediante los *motu proprio* *Mitis et Misericors Iesus* y *Mitis Iudex Dominus Iesus*², obedece a esa solicitud pastoral –que corresponde en primer lugar al Obispo diocesano (can. 383 § 1) y que comparte con los párrocos (cfr. can. 529 § 1)– en la que se pone de manifiesto el rostro cercano y materno de la Iglesia para salir al encuentro de los fieles que se hallan en dificultad. Así queda reflejado en el primer artículo de las «Reglas de Procedimiento» (en adelante: RP) que aparecen al final del mencionado *motu proprio*:

«Art. 1. El Obispo, en virtud del can. 383 § 1, está obligado a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados, que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa. Por lo tanto, comparte con los párrocos (cfr. can. 529 § 1) la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad».

Éste es el punto de partida de la reforma procesal del papa Francisco: una mayor solicitud pastoral frente a aquellos que –tras haber sufrido el doloroso trance de un fracaso matrimonial– necesitan la cercanía y el auxilio de la Iglesia para clarificar su estado de vida, sanar sus heridas abiertas y acompañarles hacia una fe cada vez más madura. Dicho con otras palabras, se trata de crecer en ese «arte del acompañamiento» del que nos habla el papa Francisco en su Exh. Ap. *Evangelii Gaudium* para que los fieles separados o divorciados puedan experimentar la cercanía de la Iglesia que sale a su encuentro para que puedan hallar la ayuda que necesitan³.

Para avanzar en esa tarea, el Sínodo Extraordinario de la Familia –celebrado en octubre de 2014– «subrayó la necesidad de hacer más accesibles y ágiles,

¹ Este servicio viene regulado en los primeros cinco artículos de las «Reglas de Procedimiento» (en adelante: RP) que aparecen al final del *motu proprio* *Mitis Iudex Dominus Iesus* y del *motu proprio* *Mitis et Misericors Iesus*. Además, en el «*Sussidio applicativo*» (en adelante: SA) elaborado por el Tribunal de la Rota Romana (enero 2016) para facilitar la puesta en marcha de esta reforma, el servicio de indagación prejudicial ocupa el primer lugar dentro del capítulo dedicado a *Immediati Provvedimenti del Vescovo Diocesano* (cfr. SA, 13-16).

² La fecha de estos *motu proprio* es del 15 de agosto de 2015, publicado mediante rueda de prensa el 8 de septiembre de ese mismo año y con entrada en vigor desde el pasado 8 de diciembre. Nuestro análisis se centrará en el texto del *Mitis Iudex*, promulgado para la Iglesia latina.

³ «La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos– en este “arte del acompañamiento”, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cfr. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana» (EG 169).

posiblemente totalmente gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad»⁴. En esa línea se ubica el servicio de indagación prejudicial: como fruto de la solicitud pastoral de la Iglesia que trata de facilitar la «accesibilidad»⁵ a un justo proceso de nulidad matrimonial, salvaguardando todas las garantías de la vía judicial frente a la vía administrativa⁶ en una materia tan ligada a la salvación de las almas, pues no se trata de favorecer la nulidad del matrimonio sino la celeridad en su correcta tramitación⁷.

2. INDAGACIÓN «PREJUDICIAL» EN LUGAR DE «PASTORAL»

Antes de seguir avanzando en la introducción de este argumento, cabría señalar una puntualización terminológica. En el art. 2 RP, este servicio viene denominado con la expresión «*investigatio praeiudicialis seu pastoralis*». Según el *Lexicon totius latinitatis* de Forcellini, la conjunción «*seu*» viene utilizada para señalar dos términos equivalentes, con el mismo significado⁸ («prejudicial» o «pastoral»). No obstante, para una mayor claridad en nuestra exposición, preferimos emplear el adjetivo «prejudicial» en lugar de «pastoral» por dos razones:

1) En primer lugar, para evitar una aparente contraposición entre pastoral y derecho⁹. Si decimos que la investigación «pastoral» es la que

⁴ *Relatio Synodi*, n. 48 (http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html).

⁵ «Alimenta el estímulo reformador el enorme número de fieles que, aunque deseando proveer a la propia conciencia, con mucha frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de la distancia física o moral; por tanto, la caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como madre se haga accesible a los hijos que se consideran separados» (*Mitis Iudex*, proemio).

⁶ «...siguiendo las huellas de mis Predecesores, los cuales han querido que las causas de nulidad sean tratadas por vía judicial, y no administrativa, no porque lo imponga la naturaleza de la cosa, sino más bien porque lo exige la necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del vínculo sagrado: y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial» (*Mitis Iudex*, proemio).

⁷ «...he decidido establecer con este Motu proprio disposiciones con las cuales se favorezca no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos y, no en menor medida, una adecuada simplificación, de modo que, a causa de un retraso en la definición del juicio, el corazón de los fieles que esperan la clarificación del propio estado no quede largamente oprimido por las tinieblas de la duda» (*Mitis Iudex*, proemio).

⁸ «*Seu. Coniunctio disiunctiva, per contractionem a sive, ut neu a neve, factam, et eiusdem prorsus significationis*» (Ae. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, vol. 5, Prati 1871, 482).

⁹ En este mismo sentido se pronuncia Regordán: «Tomada esta identificación en sentido absoluto [prejudicial y pastoral], equivaldría a excluir el sentido profundamente pastoral de una estructura judicial, tal es el proceso matrimonial, como más adecuado instrumento para constatar la existencia de algún motivo de nulidad en un matrimonio determinado. Conclusión esta, que no la tenemos por legítima» (F.J. REGORDÁN, *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, § 1, ponencia pronunciada con motivo de las «XIII Conversaciones Canónicas Valentinas», organizadas por la Universidad Católica S. Vicente Mártir de Valencia, del 8 al 10 de febrero de 2016. En curso de publicación).

se realiza antes del proceso, podríamos pensar que la instrucción llevada a cabo durante el proceso ya no es «pastoral». Entendemos por «pastoral» aquella actividad que tiene que ver con la misión salvífica de Cristo Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas. Por tanto, toda la actividad jurídica en la Iglesia es «pastoral» porque está orientada a ese fin último o ley suprema de todo el ordenamiento canónico: la *salus animarum* (can. 1752). Una afirmación que encontramos ampliamente comentada en varios discursos del Santo Padre a la Rota Romana. Cabe destacar –por su particular relevancia en este tema– la emblemática alocución de S. Juan Pablo II, pronunciada el 18-I-1990¹⁰, que posteriormente fue citada por Benedicto XVI en otros tres discursos rotales (2006, 2010 y 2011)¹¹.

2) En segundo lugar, porque la expresión «prejudicial» indica con mayor precisión la índole de esa investigación: es «previa al juicio» y, por tanto, recaba los elementos que permiten discernir si existe o no el legítimo fundamento para incoar un proceso de nulidad matrimonial (cáns. 1505 § 2, n. 4 y 1675).

Llegados a este punto, conviene recordar que la investigación prejudicial regulada en los arts. 1-5 RP no supone una novedad absoluta en el ordena-

¹⁰ «Las dimensiones jurídica y pastoral se unen inseparablemente en la Iglesia peregrina en esta tierra. Sobre todo, existe una armonía debida a su común finalidad: la salvación de almas. Pero hay más. En efecto, la actividad jurídico-canónica es pastoral por su misma naturaleza. Constituye una participación especial en la misión de Cristo Pastor; y consiste en actualizar el orden de justicia intraeclesial querida por Cristo mismo. La actividad pastoral, a su vez, aunque se extienda más allá de los exclusivos aspectos jurídicos, incluye siempre una dimensión de justicia. Sería imposible, de hecho, llevar almas hacia el reino del cielo si se prescindiese de ese mínimo de caridad y de prudencia que consiste en el compromiso de hacer observar la ley y los derechos de todos en la Iglesia. Se sigue de ahí que cualquier contraposición entre las dimensiones pastorales y jurídicas es engañosa. No es verdad que, para ser más pastoral, la ley debe hacerse menos jurídica» (SAN JUAN PABLO II, Discurso a la Rota Romana, 18-I-1990, n. 4).

¹¹ «Detrás de este planteamiento se oculta una supuesta contraposición entre derecho y pastoral en general. No pretendo afrontar ahora a fondo esta cuestión, ya tratada por Juan Pablo II en repetidas ocasiones, sobre todo en el discurso de 1990 a la Rota romana (cfr. AAS 82 [1990] 872-877). En este primer encuentro con vosotros prefiero centrarme, más bien, en lo que representa el punto de encuentro fundamental entre derecho y pastoral: el amor a la verdad» (28-I-2006). «...en la Iglesia la actividad jurídica tiene como fin la salvación de las almas y “constituye una peculiar participación en la misión de Cristo Pastor... al realizar el orden querido por el mismo Cristo” (Juan Pablo II, Alocución a la Rota Romana, 18 de enero de 1990, AAS 82 [1990] 874, n. 4)» (29-I-2010). «La relación entre el derecho y la pastoral estuvo en el centro del debate postconciliar sobre el derecho canónico. La bien conocida afirmación del Venerable Siervo de Dios Juan Pablo II, según la cual “no es cierto que para ser más pastoral, el derecho deba hacerse menos jurídico” (Alocución a la Rota Romana, 18 de enero de 1990, n. 4: AAS 82 [1990] 874) expresa la superación radical de una aparente contraposición. “La dimensión jurídica y la pastoral –decía– están inseparablemente unidas en la Iglesia peregrina sobre esta tierra. Ante todo, hay en ellas una armonía que deriva de su finalidad común: la salvación de las almas” (ibid.)» (22-I-2011).

miento canónico. La *Dignitas Connubii* (en adelante: DC) ya establecía que en cada tribunal existiera un servicio de consulta previa: «*En cada tribunal debe haber un servicio o una persona a los que pueda dirigirse cualquiera, con libertad y fácilmente, para aconsejarse sobre la posibilidad de introducir la causa de nulidad de su matrimonio y sobre el modo de proceder, en la medida en que pudiera haber fundamento*» (DC 113 § 1)¹².

Tras una sencilla comparativa, consideramos que el *Mitis Iudex* no pretende anular dicho servicio sino ampliarlo, involucrando un mayor número de agentes pastorales a diversos niveles, tal y como veremos en los siguientes apartados.

3. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE SERVICIO: CUÁL ES SU FINALIDAD?

A tenor del art. 3 RP, se trata de un «servicio de consulta» (*munus consulendi*) y se orienta «a recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial, ordinario o más breve» (RP 2). Para ello, «se debe indagar si las partes están de acuerdo en pedir la nulidad» (RP 4), ya que el litisconsorcio activo –inicial o sobrevenido– es el primero de los requisitos establecidos por el can. 1683 para la incoación del proceso más breve ante el Obispo. Obviamente, el acuerdo no sólo debe versar sobre el hecho de que el matrimonio sea declarado nulo, sino también sobre el motivo o capítulo de nulidad (designados con el mismo *nomen iuris*), de lo contrario no existiría un verdadero litisconsorcio¹³.

¹² Cfr. J. GARCÍA MONTAGUD, *El nuevo servicio de orientación jurídica de los Tribunales Eclesiásticos*, en *Nuevas situaciones, nuevas leyes, nuevas respuestas* (Actas de las XXIX Jornadas de Actualidad Canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 15-17 de abril de 2009), Dykinson, Madrid 2010, 161-189; J. M. DÍAZ MORENO, *Anotaciones personales sobre el «servicio de orientación jurídica»*, *ibid.*, 191-207.

¹³ Este requisito hace inviable la aplicación de la conformidad equivalente (cfr. DC 291 § 2) a una demanda en la que se solicite la vía del proceso más breve ante el Obispo. Tal sería el caso en el que cada cónyuge quisiera invocar la nulidad matrimonial por el mismo motivo o hecho jurídico principal (*causa petendi*) aunque enfocado desde distintas perspectivas jurídicas (*nomina iuris*) o invocando cánones diversos (*capita nullitatis*). En este mismo sentido, sobre la inviabilidad de aplicar la conformidad equivalente a estos casos, se pronuncia Llobell: «*Detta procedura richiede un vero litisconsorzio attivo, iniziale o successivo, di entrambi i coniugi e per il “medesimo capo di nullità”, non essendo possibile nel processus brevior una “conformità equivalente” fra due libelli di domanda con nomina iuris diversi* (cfr. *Mitis Iudex* can. 1683, n. 1; DC arts. 289 § 3, 291 § 2). Difatti, il “consenso” al libello di domanda dell’attore da parte del coniuge inizialmente convenuto è una vera adesione litisconsortile, fatta di propria iniziativa o aderendo all’invito del Vicario giudiziale (cfr. RP art. 15)» (J. LLOBELL, *Questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal motu proprio «Mitis Iudex»*, § 5.2, ponencia pronunciada con motivo del Seminario de estudio *La riforma operata dal motu proprio «Mitis Iudex»*, organizado por LUMSA Università. Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano & Consociatio Internationalis Studio

Esta investigación «*se concluye con la demanda que se deberá presentar, si fuera el caso, al tribunal competente*» (RP 5).

No obstante, el SA otorga unas competencias más amplias a este *munus*, incluyendo también una adecuada mediación para aquellas parejas que necesitan esa ayuda orientada a superar las crisis de convivencia conyugal. En línea con el n. 117 del *Instrumentum Laboris* para el Sínodo Ordinario de la Familia (23-VI-2015)¹⁴ y con el n. 82 de su *Relatio finalis* (24-X-2015)¹⁵, el SA establece tres líneas de actuación, siguiendo un orden lógico de sucesión en el tiempo¹⁶:

- a) ayudar a superar las crisis conyugales;
- b) recoger los elementos útiles para las causas de nulidad matrimonial;
- c) elaborar el libelo de demanda a presentar ante el tribunal competente.

En primer lugar, antes de aceptar una causa –tal y como viene exigido por el nuevo can. 1675 (equivalente al anterior can. 1676)– el juez debe tener la certeza de que el matrimonio haya fracasado irreparablemente, de manera que sea imposible restablecer la convivencia conyugal. No se debe confundir este requisito legal exigido al juez para la admisión de la demanda con la indagación del servicio prejudicial (facultativo, a instancia de parte, con carácter orientativo). Sin embargo, resulta obvio que en ambos casos se persigue la misma finalidad. No olvidemos que, en el Derecho Canónico, los juicios revisten carácter de último recurso, cuando resulta inviable otra alternativa para

Iuris Canonici Promovendo, en la «Sala Giubileo» de la LUMSA. Roma, 30 noviembre 2015. En curso de publicación a través de la revista *Ius Ecclesiae* 28 [2016]).

¹⁴ «*Se propone que en cada diócesis se garanticen, de manera gratuita, los servicios de información, asesoramiento y mediación relacionados con la pastoral familiar, especialmente a disposición de personas separadas o de parejas en crisis. Un servicio así cualificado ayudaría a las personas a emprender el recorrido judicial, que en la historia de la Iglesia resulta ser el camino de discernimiento más acreditado para verificar la validez real del matrimonio*» (*Instrumentum Laboris*, n. 117). El subrayado es nuestro.

¹⁵ «*L'attuazione di questi documenti [los dos motu proprio del 15-VIII-2015] costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr: MI, arts. 2-3)*» (*Relatio finalis*, n. 82). El subrayado es nuestro.

¹⁶ Cfr. SA, 16.

resolver el litigio¹⁷. Incluso cuando se ha verificado la imposibilidad de la reconciliación, el juez debe animar a los cónyuges a dejar al margen toda hostilidad y todo interés personal, para colaborar sinceramente en la búsqueda de la verdad objetiva, tal y como lo exige la naturaleza misma de la causa matrimonial¹⁸. Además, teniendo en cuenta el deber de proteger la institución matrimonial y los grandes bienes que entran en juego con ella, resulta absolutamente necesario que el primer objetivo de la fase preliminar, ya sea por parte del juez –de oficio– como a través del servicio de indagación prejudicial –a instancia de parte– sea tratar de restablecer la convivencia y, en su caso, procurar la convalidación del matrimonio¹⁹.

En segundo lugar, no basta constatar la imposibilidad de la reconciliación para admitir a trámite la demanda. Es necesario que la petición goce del requerido *fumus boni iuris* (can. 1505 § 2, n. 4; DC 121 § 1, n. 4) o mínimo fundamento (can. 1676 § 1; DC 122). Cuando el libelo parece carecer de base alguna, el art. 120 § 2 DC permite que el presidente del tribunal disponga de una investigación previa sobre la sustancia de la causa. La demanda deberá ser rechazada si se verifica su falta de consistencia y no se prevé que aparezca algún fundamento a lo largo del proceso. Tampoco en este caso se debe confundir la investigación preliminar del juez con la realizada por el servicio prejudicial²⁰, pero –una vez más– la finalidad que se persigue es la misma: evitar la tramitación de un proceso inútil por falta de fundamento en su petición.

Por último, cabe señalar que se trata de un servicio que el Obispo pone a disposición de los fieles separados o divorciados con carácter facultativo. No se trata de un organismo por el que los fieles deben pasar necesariamente para la introducción de la demanda de nulidad. En ese mismo sentido, las conclusiones de ese organismo prejudicial sobre la viabilidad del proceso tienen un

¹⁷ Los cán. 1713-1716 vienen agrupados bajo el título: «*De los modos de evitar los juicios*». En el primero de esos cánones queda claramente formulado el carácter de último recurso atribuido al juicio: «*Para evitar los litigios judiciales, es útil emplear la transacción o reconciliación, o someter la controversia al juicio de uno o varios árbitros*» (can. 1713).

¹⁸ Cfr. DC 65 §§ 2-3 (cfr. nt. 45).

¹⁹ Así venía recogido en el antiguo can. 1676, exhortando al juez a adoptar un papel activo en la reconciliación de los cónyuges: «*el juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges, si es posible, a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal*» (DC 65 § 1).

²⁰ «*Tal investigación previa [DC 120 § 2], empero, no puede ser confundida con la prejudicial o pastoral del MP: aquella primera es ordenada de oficio por un órgano revestido de potestad judicial y da por supuesta la introducción de la demanda; esta segunda, será ordenada por un órgano revestido de potestad administrativa a instancia de parte y tiene por finalidad, concluir o no, con un hipotético escrito de demanda*» (F. J. REGORDÁN, *La investigación preliminar...* [cfr. nt. 9], § 2. En curso de publicación).

carácter orientativo, no son vinculantes para los fieles a la hora de presentar o no la demanda de nulidad, ni tampoco son vinculantes para los jueces en orden a su admisión o rechazo.

4. ¿QUIÉNES DEBEN LLEVAR A CABO ESTE SERVICIO?

Tal y como afirma el art. 3 RP, el Ordinario del lugar debe confiar este servicio de investigación prejudicial a personas consideradas idóneas. Existen razones de peso para que el Obispo diocesano no realice esa función por sí mismo. En efecto, si ejerciera personalmente esa labor de acompañamiento²¹, ayudando a sus fieles a considerar la viabilidad de una demanda de nulidad matrimonial y a recabar elementos útiles para ello, podría quedar comprometida su independencia en sede judicial y –en ese caso– debería inhibirse²² (o podría ser recusado)²³ si fuese requerida su intervención como juez, tras ser admitido el libelo incoando el nuevo proceso más breve²⁴.

Por ese motivo, para evitar conflictos de este calibre en el ejercicio del ministerio episcopal, la DC señala la conveniencia de que el Obispo diocesano no ejerza por sí mismo la potestad judicial, a menos que lo exijan causas especiales (DC 22 § 2). Al mismo tiempo, en esta misma Instrucción, para salvaguardar la independencia del juez y del defensor del vínculo en el ejercicio de su función, se indica expresamente su inhabilitación en caso de haber desempeñado en esa misma causa el servicio de consulta previa (DC 113 § 2). Sí se reconoce la idoneidad de los patronos estables para realizar dicho servicio (DC 113 § 3).

Sin duda que esos patronos estables están incluidos en el grupo de las personas idóneas indicadas en el art. 3 RP: «*La misma investigación será confiada por el Ordinario de lugar a personas consideradas idóneas, dotadas de competencias*

²¹ Así podría deducirse del dictado del can. 383 § 1. *Al ejercer su función pastoral, el Obispo diocesano debe mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían, cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si habitan en el territorio como si se encuentran en él temporalmente, manifestando su afán apostólico también a aquellos que, por sus circunstancias, no pueden obtener suficientemente los frutos de la cura pastoral ordinaria, así como a quienes se hayan apartado de la práctica de la religión.*

²² Can. 1448 § 1. *No acepte el juez conocer una causa en que tenga interés por razón de consanguinidad o afinidad en cualquier grado de línea recta y hasta el cuarto grado de línea colateral, o por razón de tutela o curatela, amistad íntima, aversión grande, obtención de un lucro o prevención de un daño* (DC 67 § 1).

²³ Can. 1449 § 1. *En los casos indicados en el can. 1448, si el propio juez no se inhibe, la parte puede recusarlo* (cfr. DC 68 § 1). § 3. *Si actúa como juez el mismo Obispo y es recusado, debe abstenerse de juzgar* (DC 68 § 3).

²⁴ Cfr. cáns. 1676 § 2 y 1683-1687.

no sólo exclusivamente jurídico-canónicas». En este contexto, entendemos por «competencia» no sólo la capacidad jurídica para intervenir en este ámbito prejudicial, otorgada por el mandato o la aprobación del Obispo diocesano, sino también la idoneidad o habilidad necesaria para llevar a cabo esa función específica, en base a la propia ciencia y experiencia²⁵. La necesidad de personal cualificado supone un notable esfuerzo en el trabajo formativo, para que todos los agentes que intervienen en la fase prejudicial gocen de la idoneidad necesaria para ello.

Este enfoque sobre los agentes que deben prestar dicho servicio nos lleva a pensar en un equipo multidisciplinar donde la realidad matrimonial sea contemplada globalmente, en toda su riqueza. Dicha propuesta encuentra un perfecto eco en la labor de los Centros de Orientación Familiar (en adelante: COF), tal y como vienen presentados en el n. 209 del *Directorio de Pastoral Familiar* (en adelante: DPF), elaborado por la Conferencia Episcopal Española (21-XI-2003): «Es en el COF donde se afrontan los problemas desde una visión global e integradora de la persona, el matrimonio y la familia, entendidos como un todo interrelacionado y en constante proceso de crecimiento. Personas católicas con experiencia seria de fe, actuando en equipo y especializadas en las distintas facetas del matrimonio y la familia –espiritualidad, moral, psiquiatría, psicología, ginecología, sexualidad, pedagogía, derecho, orientación familiar, trabajo social, etc.– podrán atender; en estos centros, los problemas para encontrar cauces de solución. Es necesario, pues, cuidar la formación permanente doctrinal, científica, moral y espiritual de los profesionales y colaboradores de los COF en orden a su plena comunión con el Magisterio de la Iglesia y a la eficacia de su intervención».

Son numerosas las ventajas que ofrece esa labor interdisciplinar de los COF, donde la orientación familiar no sólo se ejerce de forma terapéutica (para la superación de la crisis conyugal o para estudiar la viabilidad de un proceso de nulidad) sino que también se aplica de forma preventiva (favoreciendo un adecuado desarrollo de la comunicación en la pareja o en otras relaciones familiares). Además, una buena coordinación entre los COF y los tribunales eclesiásticos²⁶ ofrece múltiples aplicaciones interesantes no sólo en la fase pre-

²⁵ Ambas acepciones de la palabra «competencia» vienen recogidas en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española en los siguientes términos: «2. f. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 3. f. Ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública o a una autoridad judicial o administrativa» (<http://dle.rae.es/?w=competencia>).

²⁶ «...aún cuando existan razones legítimas en orden a iniciar un proceso de separación, nulidad matrimonial, disolución del matrimonio en favor de la fe o dispensa del matrimonio rato y no consumado, antes de

judicial²⁷, sino también en la correcta instrucción del proceso (función pericial)²⁸ e incluso en los procedimientos para el levantamiento de veto²⁹.

En definitiva, podemos deducir que la pretensión del *Mitis Iudex* consiste en otorgar más ampliamente dicho servicio de orientación o indagación prejudicial –ya previsto en DC–, involucrando en esa tarea a más personas u organismos, no sólo a nivel diocesano sino también a nivel parroquial. No olvidemos que la investigación prejudicial viene encomendada, en primer lugar, «al párroco propio o al que ha preparado a los cónyuges para la celebración de las nupcias» (RP 3). También puede ser confiada esa tarea a otros clérigos, consagrados o laicos. En cualquiera de los casos, siempre necesitarán la aprobación del Ordinario del lugar (cfr. RP 2).

Por último, puesto que se trata de indagar en cuestiones delicadas, conviene que la persona responsable de la investigación prejudicial sea una sola, actuando bajo juramento de preservar el secreto profesional que concierne a su tarea. Obviamente, esa persona responsable podrá –con el consentimiento del solicitante– pedir la colaboración de las personas que considere oportunas para llevar a cabo esa labor.

aceptar la causa, el juez, o por delegación el Centro de Orientación Familiar; empleará medios pastorales (Orientación Familiar) tendentes a la reconciliación de las partes. De ahí la importante necesidad de la coordinación de los Tribunales Eclesiásticos con los Centros de Orientación Familiar» (DPF 210). «Es necesario tener presente que no sólo se debe promover la unión conyugal cuando hay un matrimonio válido; también cuando consta la posibilidad de nulidad matrimonial, tanto los COF como los jueces eclesiásticos, emplearán los medios pastorales necesarios para inducir a los cónyuges, si es posible, a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal» (DPF 213).

²⁷ «Conviene que el asesoramiento jurídico sea ejercido por profesionales verdaderamente católicos que puedan explicar no sólo los procedimientos sino el sentido de los mismos, y hacer presente a la Iglesia en esa situación conflictiva. De ahí la importante necesidad, también en esta ocasión, de la coordinación de los Tribunales Eclesiásticos con los COF» (DPF 213).

²⁸ «Debe constar de un equipo de profesionales de los distintos ámbitos que afectan al matrimonio y la familia: orientadores familiares, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, sexólogos, médicos, juristas, moralistas y sacerdotes, etc., dotados de competencia científica actualizada, de disponibilidad para el trabajo en equipo, y para el método de orientación y consulta específico del COF. Los profesionales realizarán un trabajo de asesoramiento, consulta, terapia y prevención a nivel personal, matrimonial y familiar en situaciones de dificultad o en crisis relacional. Los ámbitos de intervención serán los problemas matrimoniales, con particular atención a la vida relacional en los aspectos de comunicación y diálogo, a la vida sexual, a la regulación de la fertilidad y a la acogida de la vida; las relaciones familiares, con una atención a todas las fases del ciclo familiar, a las situaciones irregulares, a los ancianos; la educación de los adolescentes y jóvenes para la vida y el amor; las actividades de formación y prevención en el ámbito comunitario y territorial para favorecer una nueva cultura familiar. También podrá ejercer una función pericial en relación a los Tribunales Eclesiásticos» (DPF 277).

²⁹ «En los procedimientos de levantamiento de veto para contraer nuevas nupcias tras una declaración de nulidad, los Tribunales Eclesiásticos podrán recurrir también a los COF para solicitar de ellos los pertinentes informes periciales (psicológicos, espirituales, etc.)» (DPF 213).

5. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

La investigación prejudicial se ofrece como servicio de consulta (*munus consulendi*, RP 3) a «los fieles [christífideles] separados o divorciados que dudan sobre la validez del propio matrimonio o están convencidos de su nulidad» (RP 2). No obstante, tratándose de un servicio de indagación «prejudicial», consideramos que debe ir inseparablemente ligado a la capacidad de incoar el proceso de nulidad matrimonial, disponible para todos aquellos que se planteen la legítima impugnación de su matrimonio (*ius impugnandi*).

Por eso, teniendo en cuenta la naturaleza del matrimonio en cuanto *res sacra*³⁰, la competencia de la Iglesia sobre las «causas espirituales» (can. 1401, 1º)³¹ y el principio de habilidad legal de cualquier cónyuge para impugnar su propio matrimonio en la normativa vigente³² (cáns. 1476 y 1674 § 1, 1º)³³, pensamos que este servicio debe estar también a disposición de aquellos esposos que no ostenten la condición de «*christifidelis*»³⁴ y necesiten un asesoramiento cualificado para plantear la viabilidad de su demanda de nulidad matrimonial.

³⁰ Todo matrimonio, por su propia naturaleza (*suapte natura*), es sagrado (cfr. LEÓN XIII, *Arcanum*, 10-II-1880, AAS 12 [1879-1880] 385-402).

³¹ Can. 1401. *La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: 1º) las causas que se refieren a cosas espirituales o anejas a ellas.*

³² «La prohibición de impugnar el matrimonio que el CIC 17 y el Santo Oficio –27 de enero de 1928– impusieron a los cónyuges culpables, acatólicos y excomulgados, influyó en la posible actuación conjunta de los cónyuges (...). En el CIC 83 han desaparecido estas limitaciones del ejercicio del “*ius impugnandi matrimonium*”» (C. M. MORÁN, *El derecho de impugnar el matrimonio*, Salamanca 1998, 356). «Resulta evidente que la prohibición de acusar de los acatólicos contravenía el derecho natural de los cónyuges a saber la verdad de su estado personal, así como el derecho también natural a contraer válido matrimonio, además no tenía en cuenta el carácter declarativo del proceso de nulidad matrimonial; en los casos de matrimonio de un católico con un acatólico, aquél podía acusarlo directamente, mientras que éste no podía hacer lo mismo sin licencia previa de la Santa Sede, y dependía del parecer del promotor de justicia, lo cual no dejaba de ser una discriminación inaceptable. La justicia canónica no podía quedar reservada a quien el ordenamiento canónico considerara “*persona in Ecclesia Christi*”, sino que, por ser la justicia un bien común a todo hombre o mujer, debía ser servido por los tribunales a todo ser humano por el hecho de serlo» (IDEM, «Impugnación del matrimonio», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO [eds.], *Diccionario general de Derecho Canónico*, IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor [Navarra] 2012, 459).

³³ Can. 1476. *Cualquier persona, esté o no bautizada, puede demandar en juicio; y la parte legítimamente demandada tiene obligación de responder.* Can. 1674 § 1. *Son hábiles para impugnar el matrimonio: 1º) los cónyuges.*

³⁴ Can. 204 § 1. *Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo.*

En esa misma línea, la disponibilidad de dicho servicio no sólo se plantea cuando quien lo solicita es un no bautizado casado con un bautizado (can. 1671)³⁵, sino también cuando se trata de un matrimonio entre dos acatólicos o no bautizados, cuando por un motivo justo su causa entre en relación con la Iglesia³⁶. Así sucede cuando uno de esos esposos desea contraer nuevo matrimonio con parte católica. En el caso de dos no bautizados, aunque sea posible solicitar la disolución del vínculo «en favor de la fe» (cáns. 1143-1149), cabe también el proceso de nulidad matrimonial ante uno de los tribunales competentes señalados en el can. 1672³⁷.

6. ÁMBITO DE ACTUACIÓN: PARROQUIAL, DIOCESANO, INTERDIOCESANO, CONFERENCIA EPISCOPAL

El *Instrumentum Laboris* para el Sínodo Ordinario de la Familia (23-VI-2015) sugería que este servicio fuese «cualificado», impartido a nivel diocesano en el ámbito de la pastoral familiar, dotado de personal capacitado para informar, asesorar y mediar adecuadamente en situaciones delicadas para ayudar a las parejas a superar las crisis en la convivencia. En el caso de las personas ya separadas, ante la imposibilidad de una reconciliación, este servicio supondría una ayuda para emprender la vía judicial, en cuanto medio más idóneo para verificar la nulidad del matrimonio.

No obstante, sin olvidar que el ámbito propio de este servicio «cualificado» se sitúa a nivel diocesano, el *Mitis Iudex* prevé que pueda ser también prestado a nivel parroquial y a nivel interdiocesano. A tenor de los arts. 2-3 RP, se trata de un servicio impartido a través de una «estructura estable» (RP 3), que debe ser puesta en marcha «en las estructuras parroquiales o diocesanas» (RP 2), «en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana unitaria» (ídem). Sin embargo, también está contemplado que dicho servicio pueda ser desempeñado a nivel interdiocesano: «diversas diócesis juntas conforme a las actuales agrupaciones» (RP 3).

³⁵ Can. 1671: *Las causas matrimoniales de los bautizados corresponden al juez eclesiástico por derecho propio.*

³⁶ Cfr. J. HERVADA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, vol. 3: *Hacia un sistema de Derecho matrimonial*, Eunsa, Pamplona 1973, 269-274.

³⁷ Cfr. J. LLOBELL, *sub can. 1671*, en *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Eunsa, Pamplona 2002, 1832.

No se especifica si por «actuales agrupaciones de diversas diócesis» debe entenderse los tribunales interdiocesanos, las provincias eclesiásticas o las Conferencias episcopales. Tan sólo se indica la posibilidad de crear una estructura estable para proveer al servicio de indagación prejudicial y, si fuera el caso, redactar un vademécum para facilitar el adecuado desarrollo de la investigación³⁸. Sin embargo, el SA elaborado por el Tribunal de la Rota Romana (enero 2016) para facilitar la puesta en marcha de esta reforma procesal, viene a colmar dicha laguna encomendando a las Conferencias episcopales la tarea de elaborar dicho vademécum³⁹. A lo largo de todo el *Mitis Iudex*, tan sólo se nombra a las Conferencias en el criterio fundamental n. 6 para definir su función propia a través de las siguientes obligaciones:

- a) respetar absolutamente el derecho de los Obispos de organizar la potestad judicial en la propia Iglesia particular;
- b) restablecer la cercanía entre el juez y los fieles;
- c) dar a cada Obispo el estímulo y la ayuda para poner en práctica la reforma del proceso matrimonial;
- d) garantizar, en cuanto sea posible, la gratuidad de los procesos, salvada la justa y digna retribución de los operadores de los tribunales.

Las dos primeras obligaciones obedecen a un principio descentralizador, que corresponde a uno de los criterios más importantes de esta reforma: la centralidad del Obispo en el servicio a la justicia⁴⁰. Las otras dos obligaciones parecen encuadrar el principio anterior en el cauce de una adecuada centralización, para unificar criterios de actuación y evitar agravios comparativos entre diócesis de una misma Conferencia episcopal. La redacción de un vademécum sería, sin duda, un instrumento muy útil para ello.

³⁸ «*Dioecesis, vel plures dioeceses simul, iuxta praesentes adunationes, stabilem structuram constituere possunt per quam servitium hoc praebeatur et componere, si casus ferat, quoddam Vademecum elementa essentialia ad aptiorem indaginis evolutionem referens*» (RP 3).

³⁹ «*Secondo la nuova legge le Conferenze episcopali organizzeranno un Vademecum per garantire organizzazione e uniformità nelle procedure, con particolare riguardo allo svolgimento dell'indagine pastorale, di cui infra* [nota al pie 11: cfr. *Mitis Iudex, Regole procedurali, art. 3*]» (SA, 10).

⁴⁰ Así viene también recogido en el primero de los criterios fundamentales señalados por el SA: bajo el título «*Capisaldi della riforma*» aparece en el apartado n. 1: «*La centralità del Vescovo nel servizio della giustizia*» (9). Fruto de esa centralidad y para favorecer una mayor cercanía hacia los propios fieles, se anima a los Obispos que todavía no dispongan de un tribunal en la propia diócesis, a constituirlo, con la facultad de desistir del tribunal interdiocesano en virtud del art. 8 § 2 RP, emitiendo el Decreto y llevando a cabo la notificación pertinente según el modelo sugerido por el SA (59-61).

Por analogía con el carácter provisional de los tribunales interdiocesanos⁴¹ y a la luz de las aclaraciones aportadas por el SA⁴², entendemos que la investigación prejudicial a este nivel tan sólo puede existir con carácter subsidiario, mientras no exista en la diócesis el personal debidamente preparado para ello. Por tanto, el ámbito propio de actuación para este *munus consulendi prejudicialis* es el nivel diocesano. Ello no es óbice para que cada comunidad parroquial –empezando por el propio párroco (RP 3)–, en la medida en que disponga de personal cualificado, trabaje en coordinación con el organismo diocesano competente para facilitar la realización de la indagación prejudicial.

7. PROPUESTAS SOBRE UN POSIBLE «VADEMÉCUM»

En primer lugar, cabría distinguir tres etapas dentro de la fase prejudicial: consulta, recopilación de pruebas y, en su caso, presentación de la demanda.

A) En fase de consulta:

I. *Consiste en la entrevista personal (una o varias) con la persona designada para esa función en el servicio de indagación prejudicial.*

En esa primera entrevista será vital la capacidad de escucha y empatía para permitir que quien acude a este servicio pueda expresarse con toda franqueza y dar a conocer ampliamente su *íter* biográfico.

II. *Agotar las vías de reconciliación y, en su caso, comprobar la viabilidad de una posible convalidación o sanación del matrimonio.*

En ese ámbito de agotar las vías de reconciliación, pueden desempeñar un papel muy eficaz los COF.

⁴¹ Cfr. RP 8.

⁴² «*I Vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza*» (SA, 42). El subrayado corresponde al original.

III. *Averiguar las motivaciones de quien solicita la nulidad matrimonial para asegurar la existencia de un interés legítimo.*

Dado que el vínculo matrimonial pertenece al bien público de la Iglesia –que debe ser tutelado por el juez, el defensor del vínculo y el promotor de justicia–, su impugnación no puede quedar a merced de un interés meramente particular, contrario al bien común eclesial. La presentación de la demanda de nulidad matrimonial exige –como afirma Roberti– un interés legítimo, directo y actual⁴³. En consecuencia, no es admisible una demanda que venga presentada por deseos de venganza, chantaje o motivos fraudulentos no sólo ajenos sino contrarios a la ley suprema de la *salus animarum*. Sería una demanda rechazable por falta de *fumus «boni» iuris* ya que supondría una *contradictio in terminis* permitir un uso indiscriminado del derecho al proceso. Equivaldría a afirmar la existencia de un «derecho a una acción procesal injusta»⁴⁴. En esa línea se pronuncia DC 65 §§ 2-3, exhortando a los cónyuges a adoptar una actitud adecuada frente al proceso, donde –en un clima de respeto y cortesía– la primacía corresponda a la búsqueda de la verdad objetiva, dejando a un lado cualquier hostilidad⁴⁵.

IV. *Analizar el relato de los hechos y discernir si existe o no fundamento para solicitar la nulidad matrimonial y por qué motivo.*

El n. 213 del DPF sugiere que en los COF haya expertos en el ámbito jurídico-canónico, que podrían asumir la función de asesoramiento prejudicial prevista en DC 113⁴⁶.

⁴³ Cfr. F. ROBERTI, *De processibus*, apud custodiam librariam Pontifici Institutu Utriusque Iuris, vol. 1, Romae 1941, 639-640.

⁴⁴ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad matrimonial por los esposos*, *Ius Canonicum* 41 (2001) 169-189.

⁴⁵ «...el juez exhortará a los cónyuges para que, posponiendo todo deseo personal, actuando verazmente con caridad, colaboren sinceramente en la búsqueda de la verdad objetiva, como lo exige la naturaleza misma de la causa matrimonial» (DC 65 § 2). «Si el juez percibe una actitud de aversión recíproca entre los cónyuges, debe exhortarlos con firmeza a que durante el proceso, dejando a un lado cualquier hostilidad, se traten mutuamente con benevolencia, cortesía y caridad» (DC 65 § 3).

⁴⁶ Cfr. nt. 27.

B) En fase de recopilación de pruebas:

V. Elaborar un *memorándum* donde se relaten los hechos más relevantes para la nulidad matrimonial⁴⁷.

En dicho *memorándum* no podrán faltar las siguientes etapas: 1) *anterior al noviazgo*. Ambiente familiar / educacional (infancia y adolescencia), otras relaciones precedentes, posibles traumas, carácter, sensibilidad, creencias... 2) *noviazgo*. La iniciativa de empezar, elementos de atracción, estilo de relación, frecuencia, frialdad / cercanía, rupturas / reconciliaciones, proyecto matrimonial, propuesta de casarse, «*causa contrahendi*»... 3) *convivencia matrimonial*. Inicio de la convivencia, primeras desavenencias, calidad de comunicación, relaciones íntimas, adaptación y respeto a las normas, responsabilidad (en el hogar, en la educación de los hijos, en el trabajo), causa de la separación... 4) *posterior a la ruptura*. Trámites legales de separación y divorcio, convenio regulador (obligaciones de derecho natural), trato hacia la otra parte y hacia los hijos, estilo de vida...

Todas estas etapas son muy importantes, evidentemente, sin perder de vista que al tratarse de un proceso de nulidad matrimonial, dicha nulidad se da en el momento preciso de manifestar el consentimiento, no después; por eso será mucho más importante prestar especial atención a todas las fases previas a la convivencia ma-

⁴⁷ Para la elaboración de dicho *memorándum*, siguiendo la opinión de Díaz Moreno basada en su amplia experiencia sobre el tema, conviene seguir «un cuestionario bien elaborado y concreto»: «Esta experiencia me lleva a defender la utilidad, conveniencia, hasta la necesidad de entregar al interesado algún cuestionario bien elaborado y concreto. De otra forma, en la mayoría de los casos es difícil salir del terreno de las ambigüedades y generalidades de las que apenas se puede deducir una opinión fundamentada sobre la posible nulidad» (J. M. DÍAZ MORENO, *Anotaciones personales...* [cfr. nt. 12], 197, nota 7). No obstante, de León explica las ventajas que puede ofrecer en determinados casos dejar que el propio sujeto elabore su *memorándum* sin las restricciones de tener que ceñirse a un interrogatorio. Dicho relato podrá ser después completado en una posterior entrevista con el abogado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta el estado anímico de quien plantea la nulidad de su matrimonio y el clima de sosiego que pueda necesitar para recordar con mayor precisión todo lo ocurrido: «Es importante tener en cuenta el estado anímico del cliente; hay personas que necesitan un tiempo de duelo después de la ruptura y durante meses e incluso años, no son capaces de recordar con detalle lo sucedido. Esto hay que tenerlo en cuenta, cualquiera que sea el método empleado» (E. DE LEÓN, *La tramitación de los procesos de nulidad: consulta previa e inmediación*, 6, ponencia pronunciada con motivo del «IX Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico», organizado por el Tribunal Metropolitano de Granada, del 24 al 26 de septiembre de 2015. En curso de publicación).

trimonial, pues es ahí donde nace y se consuma la nulidad. No olvidemos que una grave inmadurez afectiva, una mentalidad divorcista o un trastorno de la personalidad (por citar algunos de los ejemplos más recurrentes) no se fraguan de la noche a la mañana. Por eso resulta vital conocer bien la biografía del sujeto desde su infancia y adolescencia, teniendo en cuenta el ambiente familiar-social, el contexto educativo y las posibles experiencias negativas que hayan podido hacer mella en la personalidad del sujeto. Como contrapartida, *a posteriori*, el desarrollo de la convivencia debe ser el reflejo probatorio de las carencias que provocaron la nulidad matrimonial.

- VI. Sobre la base del memorándum, *recopilación documental* que sea pertinente para el proceso de nulidad (certificados médicos, cartas, mensajes, correos electrónicos, fotos, vídeos, etc.).
- VII. Elaboración del *elenco de testigos* que puedan dar fe de los hechos más relevantes sobre la nulidad matrimonial.

C) En fase de presentación de la demanda:

- VIII. En caso de no haberlo hecho todavía: *designación del abogado* que deberá presentar la demanda y realizar los demás trámites procesales. En línea con lo propuesto por DC 113 § 3, por razones de economía procesal y para preservar mejor la intimidad de la parte actora, reiteramos la conveniencia de que el mismo abogado o patrono estable que vaya a presentar la demanda sea la persona responsable de guiar la indagación prejudicial.
- IX. *Elaboración de la demanda*, colmando las posibles lagunas del memorándum y eliminando los datos irrelevantes que no guarden relación con el motivo por el que se solicita la nulidad matrimonial. Además, una vez comprobado el fundamento o *fumus boni iuris* del caso concreto, a la vista de los hechos y las pruebas recabadas en la fase prejudicial, se deberá evaluar también la *modalidad del procedimiento a solicitar*, teniendo en cuenta los requisitos para los procesos de nulidad (ordinario, documental y el más breve ante el Obispo) o, en su caso, para la disolución del vínculo (*in favorem fidei* o por dispensa de matrimonio rato y no consumado).

- X. Presentación de la demanda ante el *tribunal competente*, tratando de salvar en la medida de lo posible el principio de la mayor proximidad entre el juez y las partes (can. 1672; RP 7 § 1), tanto para evitar gastos innecesarios (RP 7 § 2) como para facilitar la inmediatez procesal a la hora de recoger y valorar las pruebas.

Obviamente, un vademécum de este tipo deberá ser algo «vivo», enriquecido paulatinamente con la experiencia y el transcurso del tiempo; algo que todavía no tenemos, pues nos hallamos en los albores de la aplicación de esta reforma procesal, en vigor desde el pasado 8 de diciembre.

8. A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA UNA DEFINICIÓN DE ESTE SERVICIO

Teniendo en cuenta lo afirmado hasta aquí, podemos ya tratar de ofrecer una definición de este servicio de indagación prejudicial. Regordán formula la siguiente definición, con la que estamos sustancialmente de acuerdo: «*la investigación prejudicial o pastoral, es una labor facultativa desplegada a instancia de parte por un órgano competente, mediante un acto administrativo, a personas u órganos competentes para recopilar los elementos de juicio que permitan efectuar o desestimar una intimación clara, precisa y circunstanciada. Es decir, para determinar si existe mérito suficiente para incoar un procedimiento matrimonial útil*»⁴⁸.

A la vista de las ulteriores aportaciones del Tribunal de la Rota Romana mediante el SA, nos atrevemos a aportar unos rasgos definitorios que puedan servir de complemento a la formulación anterior: la indagación prejudicial es un servicio cualificado y facultativo, creado en el ámbito de la pastoral matrimonial unitaria por el Obispo diocesano, quien muestra su solicitud hacia todos los que se hallan separados o divorciados y se cuestionan la existencia de su vínculo matrimonial, ofreciéndoles los medios adecuados para tratar –en primer lugar– de superar la crisis conyugal y restablecer la convivencia, llevando a cabo –si fuera necesario– una convalidación del matrimonio; comprobada la imposibilidad de la reconciliación, la labor de este servicio se orienta a estudiar la viabilidad de un proceso de nulidad matrimonial, recogiendo los elementos útiles para ello y –tras verificar la existencia del requerido *fumus boni iuris*– culmina con la redacción del libelo de demanda para ser presentado ante el tribunal competente⁴⁹.

⁴⁸ F. J. REGORDÁN, *La investigación preliminar...* (cfr. nt. 9).

⁴⁹ Cfr. SA, 13-16.

En definitiva, se trata de acortar la distancia entre la justicia que la Iglesia imparte y la persona que la necesita. Dicho con palabras del papa Francisco, se trata de favorecer el crecimiento de una «Iglesia en salida», que salga al encuentro de los fieles que se hallan necesitados de una especial orientación o ayuda en este ámbito de la pastoral matrimonial: *«el buen Pastor está obligado a ir al encuentro de sus fieles que tienen necesidad de un especial cuidado pastoral»*⁵⁰.

⁵⁰ RP, proemio.

Bibliografía

FUENTES

- Ae. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, vol. 5, Prati 1871.
- BENEDICTO XVI, *Discurso a la Rota Romana*, 28-I-2006.
- , *Discurso a la Rota Romana*, 29-I-2010.
- , *Discurso a la Rota Romana*, 22-I-2011.
- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España*, 21-XI-2003.
- DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, *v. Competencia* (2), en www.rae.es (14-IV-2016).
- FRANCISCO, *M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15-VIII-2015.
- JUAN PABLO II, *Discurso a la Rota Romana*, 18-I-1990.
- , *Codex Iuris Canonici*, 25-I-1983.
- LEÓN XIII, *Enc. Arcanum Divinae Sapientiae*, 10-II-1880.
- PONTIFICIO CONSEJO DE TEXTOS LEGISLATIVOS, *Instrucción «Dignitas connubii»*, 25-I-2005.
- SÍNODO EXTRAORDINARIO DE LA FAMILIA, *Relatio Synodi*, 18-X-2014.
- SÍNODO ORDINARIO DE LA FAMILIA, *Instrumentum Laboris*, 23-VI-2015.
- , *Relatio finalis*, 24-X-2015.
- TRIBUNAL APOSTÓLICO DE LA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, enero 2016.

AUTORES

- DE LEÓN, E., *La tramitación de los procesos de nulidad: consulta previa e inmediatez*, ponencia pronunciada con motivo del «IX Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico», organizado por el Tribunal Metropolitano de Granada, del 24 al 26 de septiembre de 2015 (en curso de publicación).
- DÍAZ MORENO, J. M., *Anotaciones personales sobre el «servicio de orientación jurídica»*, en *Nuevas situaciones, nuevas leyes, nuevas respuestas (Actas de las XXIX Jornadas de Actualidad Canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 15-17 de abril de 2009)*, Dykinson, Madrid 2010, 191-207.

- ERRÁZURIZ M., C. J., *Licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad matrimonial por los esposos*, Ius Canonicum 41 (2001) 169-189.
- GARCÍA MONTAGUD, J., *El nuevo servicio de orientación jurídica de los Tribunales Eclesiásticos*, en *Nuevas situaciones, nuevas leyes, nuevas respuestas (Actas de las XXIX Jornadas de Actualidad Canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 15-17 de abril de 2009)*, Dykinson, Madrid 2010, 161-189.
- HERVADA, J., *El Derecho del Pueblo de Dios*, vol. 3: *Hacia un sistema de Derecho matrimonial*, Eunsa, Pamplona 1973, 269-274.
- LLOBELL, J., *Questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m. p. «Mitis Iudex»*, ponencia pronunciada con motivo del Seminario de estudio «La riforma operata dal m. p. “Mitis Iudex”», organizado por LUMSA Università. Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano & Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, en la «Sala Giubileo» de la LUMSA. Roma, 30 noviembre 2015 (en curso de publicación a través de la revista Ius Ecclesiae 28 [2016]).
- , *sub can. 1671*, en *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Eunsa, Pamplona 2002, 1829-1833.
- MORÁN, C. M., *El derecho de impugnar el matrimonio*, Salamanca 1998.
- , «Impugnación del matrimonio», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario general de Derecho Canónico*, IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 456-462.
- REGORDÁN, F. J., *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, ponencia pronunciada con motivo de las «XIII Conversaciones Canónicas Valentinas», organizadas por la Universidad Católica S. Vicente Mártir de Valencia, del 8 al 10 de febrero de 2016 (en curso de publicación).
- ROBERTI, F., *De processibus*, apud custodiam librariam Pontifici Instituti Utriusque Iuris, vol. 1, Romae 1941.